



Asamblea General

Distr. general
25 de septiembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones, 24 a 28 de agosto de 2020

Opinión núm. 48/2020, relativa a Huseyn Abdullayev (Azerbaiyán y Turquía)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 14 de noviembre de 2019 a los Gobiernos de Azerbaiyán y Turquía una comunicación relativa a Huseyn Abdullayev. El Gobierno de Azerbaiyán respondió a la comunicación el 8 de enero de 2020, mientras que el Gobierno de Turquía lo hizo el 12 de febrero de 2020. Ambos Estados son partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

* Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Huseyn Abdullayev es un ciudadano de Azerbaiyán nacido en 1967, que vivía en Alemania antes de ser arrestado. Es un opositor declarado del Gobierno de Azerbaiyán. El Sr. Abdullayev fue elegido diputado de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán y ejerció como tal de noviembre de 2005 a mayo de 2007, cuando fue declarado culpable de los delitos de alteración del orden público y vandalismo, y condenado a dos años de libertad condicional, a raíz de una pelea que había tenido lugar en la Asamblea. Tras huir a Alemania en febrero de 2013 y publicar una canción en la que criticaba al Gobierno de Azerbaiyán, fue condenado en rebeldía por un delito de evasión de impuestos el 25 de junio de 2013. El 26 de noviembre de 2013, Alemania le otorgó asilo por motivos políticos.

a) Arresto y detención

5. Según la fuente, el Sr. Abdullayev fue arrestado el 21 de abril de 2018 en Estambul (Turquía), donde se encontraba de vacaciones, por unos 15 agentes de policía. Los funcionarios turcos no le presentaron una orden judicial, pero posteriormente se supo que el Tribunal Distrital de Yasamal, en Bakú, había dictado una orden de arresto el 11 de octubre de 2016. Las autoridades de Azerbaiyán anunciaron que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) había emitido una notificación roja, pero el documento que mostraron a los medios de comunicación había sido anulado en noviembre de 2014.

6. La fuente indica que el Sr. Abdullayev pasó una noche detenido por la policía turca en Estambul. No se le permitió comunicarse con su abogado alemán ni con uno turco. Solo se le permitió una visita, la del familiar que estaba en Turquía con él. Fue entregado a las autoridades azerbaiyanas el 22 de abril de 2018, que lo embarcaron en un avión de línea con destino a Bakú, acompañado por dos representantes del Ministerio del Interior de Azerbaiyán. No se pudo contactar a tiempo con la embajada alemana, ya que el arresto y el traslado se produjeron durante el fin de semana.

7. La fuente afirma que el arresto del Sr. Abdullayev fue ordenado por primera vez por el Tribunal Distrital de Yasamal el 26 de junio de 2013, después de que fuera condenado en rebeldía por evasión de impuestos. Las autoridades justificaron la orden de detención como medida cautelar, dado que supuestamente se había fugado durante la fase de investigación.

8. La fuente afirma que el Sr. Abdullayev fue imputado con arreglo a los siguientes artículos del Código Penal de Azerbaiyán: 178.2.1, 178.2.2 y 178.2.4 (fraude); 182.2.1, 182.2.2 y 182.2.4 (extorsión reiterada y premeditada mediante el uso de amenazas por una organización criminal con fines de lucro considerable); 192.2.1 y 192.2.2 (actividades mercantiles ilegales de una organización criminal para obtener grandes sumas de dinero); 193.2.1 y 193.2.2 (blanqueo de dinero); 213.2.1 y 213.2.2 (evasión de impuestos); 308.2 (abuso de poder); 312.2 (influencia ilegal en la decisión de un funcionario); 313 (falsificación); y 318 (cruce ilegal de frontera).

9. Aparentemente, el Gobierno de Azerbaiyán considera que el Sr. Abdullayev dirige la empresa familiar Araz Inc., aunque no desempeña en ella ningún cargo, y lo ha imputado por los delitos de actividad mercantil ilegal, evasión de impuestos y realización de obras sin licencia, todo ello en relación con las actividades de la empresa. También ha sido imputado por los delitos de abuso de poder y extorsión en relación con un incidente en el que un familiar suyo intentó entrar ilegalmente en Georgia cruzando un puesto fronterizo situado en el distrito de Balakan. Los artículos 154 y 155 del Código de Procedimiento Penal de

Azerbaiyán permiten la detención preventiva cuando hay motivos suficientes para concluir que la persona acusada podría huir, obstruir la investigación o cometer otros delitos.

10. Según la fuente, el escrito de acusación contiene pocos hechos y pruebas documentales que sustenten las acusaciones. Por ejemplo, los cargos presentados contra el Sr. Abdullayev en virtud del artículo 313 (falsificación) no aparecen respaldados por ningún hecho. Además, muchos de los cargos relacionados con los delitos de evasión de impuestos y actividad mercantil ilegal se remontan al período comprendido entre 2000 y 2012, por lo que los presuntos delitos han prescrito.

11. La fuente sostiene que después de que el Sr. Abdullayev fuera entregado por las autoridades turcas a sus homólogos azerbaiyanos y trasladado a Azerbaiyán, compareció por primera vez ante el Tribunal Distrital de Nasimi, en Bakú, el 25 de abril de 2018, más de 48 horas después de ser arrestado en Turquía y entregado por este país. El Tribunal ordenó su detención preventiva sin referirse a ningún hecho o circunstancia específicos que la justificaran. Su detención fue prorrogada el 31 de mayo de 2018, el 9 de junio de 2018, el 12 de septiembre de 2018 y el 25 de febrero de 2019.

12. La fuente añade que el Sr. Abdullayev no ha podido ponerse en contacto con su familia desde que llegó a Azerbaiyán. Tampoco se le ha permitido acceder a su abogado extranjero, que trató infructuosamente de visitarlo en la prisión y cuya solicitud oficial de visita fue denegada por el Ministerio de Justicia de Azerbaiyán. Aunque el Sr. Abdullayev tenía los medios suficientes para contratar a su propio abogado y legalmente debería habersele permitido hacerlo, el Gobierno designó a un defensor de oficio para que lo representara durante la audiencia del 25 de abril de 2018. No se le permitió designar a su propio abogado hasta una semana después de que regresara a Azerbaiyán.

13. La fuente sostiene que el Sr. Abdullayev fue entregado ilegalmente a Azerbaiyán, donde fue detenido por el Servicio Penitenciario en el establecimiento de investigación de Kurdekhanli por orden del Departamento de Investigación de la Fiscalía General de la República de Azerbaiyán.

14. La fuente subraya que el Sr. Abdullayev fue acusado junto con un familiar y cuatro guardias de fronteras azerbaiyanos, que presuntamente estuvieron implicados en el cruce de la frontera. Puesto que los guardias de fronteras estaban incluidos en el escrito de acusación, el Sr. Abdullayev fue juzgado por el Tribunal Militar de Bakú con arreglo al artículo 68.2 del Código de Procedimiento Penal. El juicio comenzó el 2 de abril de 2019. El Sr. Abdullayev y dos de los guardias de fronteras a los que se denegó la libertad bajo fianza asistieron al juicio desde una jaula con barrotes de metal. La jaula medía aproximadamente 90 cm x 90 cm, con apenas sitio para colocar una silla. Si los abogados del Sr. Abdullayev deseaban hablar con él, tenían que obtener permiso del juez para acercarse a la jaula, lo que al parecer limitó en gran medida esas comunicaciones y la capacidad del Sr. Abdullayev para participar en el juicio.

15. Según la fuente, el Sr. Abdullayev fue condenado el 1 de octubre de 2019 a seis años de prisión por el Tribunal Militar de Bakú.

b) Análisis jurídico

i) Categoría I

16. La fuente sostiene que no había fundamento jurídico que sustentara el arresto del Sr. Abdullayev el 21 de abril de 2018 en Turquía ni su posterior traslado a Azerbaiyán. Por lo tanto, la continuación de su detención y su enjuiciamiento en Azerbaiyán equivalen a una detención arbitraria con arreglo a la categoría I del Grupo de Trabajo.

17. En primer lugar, la fuente alega que ni las autoridades turcas ni las azerbaiyanas actuaron de conformidad con el artículo 9, párrafo 2, del Pacto ni con obligaciones similares consagradas en el artículo 19 de la Constitución de Turquía y en el artículo 67 de la Constitución de Azerbaiyán. Al Sr. Abdullayev no se le presentó una orden judicial y las autoridades azerbaiyanas no le permitieron acceder a un abogado o abogada. El Sr. Abdullayev tenía un visado válido para Turquía e INTERPOL no había emitido ninguna notificación roja para arrestarlo que estuviera activa. Al parecer, en Turquía no se inició

ningún procedimiento administrativo de extradición. La orden de detención dictada por un tribunal de Bakú en octubre de 2016 no era suficiente para justificar el arresto del Sr. Abdullayev en Turquía sin que un tribunal turco emitiera y tramitara una solicitud oficial de extradición.

18. En segundo lugar, la fuente cita el artículo 9, párrafo 4, y el artículo 13 del Pacto, y aduce que la entrega extrajudicial incumple esos artículos y ya ha sido considerada incompatible con el derecho internacional por el Grupo de Trabajo.

19. Además, la fuente sostiene que el Protocolo núm. 7 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), en el que son partes tanto Azerbaiyán como Turquía, exige que en los procedimientos de expulsión se respeten las garantías procesales de la persona extranjera. Ambos países son también partes en el Convenio Europeo de Extradición, que establece que “la Ley de la Parte requerida es la única aplicable al procedimiento de extradición, así como al de la detención preventiva”. La fuente sostiene que Turquía, como parte a la que aparentemente se solicitó la extradición, estaba obligada por el artículo 18, párrafo 4, del Código Penal de Turquía, que establece que no se podrá ejecutar una extradición hasta que el Tribunal Penal de Delitos Graves lo apruebe; esa disposición también permite expresamente que la persona recurra contra la decisión del Tribunal.

20. Por consiguiente, la fuente concluye que el arresto del Sr. Abdullayev en Estambul y su retorno forzoso a Azerbaiyán constituyen una entrega extrajudicial, ya que no se respetó el procedimiento de extradición. Aun en el supuesto de que la expulsión del Sr. Abdullayev fuera sancionada en Turquía por una autoridad judicial o administrativa, la orden de extradición resultante es *ultra vires* porque no se le concedió la oportunidad de impugnar su expulsión o de recurrir contra la orden de extradición antes de que fuera expulsado a Azerbaiyán. Estas garantías procesales son obligatorias tanto en virtud del derecho internacional como del derecho turco, y tienen por objeto impedir la devolución.

21. La fuente añade que la ilegalidad que caracterizó el arresto y la detención del Sr. Abdullayev y su entrega extrajudicial por Turquía hacen a este Estado responsable de las posteriores violaciones de los derechos humanos que sufrió en Azerbaiyán.

ii) Categoría II

22. La fuente señala que la detención del Sr. Abdullayev también es arbitraria con arreglo a la categoría II, ya que fue arrestado como consecuencia directa del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, que está protegido por el derecho nacional e internacional.

23. La fuente alega que el Gobierno de Azerbaiyán ha realizado un seguimiento sistemático del Sr. Abdullayev a causa de su oposición política y sus críticas al Presidente y a su Gobierno. Aunque el arresto del Sr. Abdullayev se basa en un supuesto fraude fiscal presuntamente cometido por la empresa de su familia, la investigación comenzó justo un día después de que publicara un vídeo denunciando violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía de Bakú contra manifestantes. Además, el Sr. Abdullayev no tiene ningún vínculo jurídico con la empresa, que ya ha pagado considerables cantidades en concepto de multas al Estado.

24. La fuente subraya que el orden público y la seguridad nacional no pueden servir nunca de pretexto para restringir la expresión de opiniones sobre la actuación y las políticas del Gobierno, el debate político, la denuncia de violaciones de los derechos humanos y otras actividades similares que están protegidas por la libertad de expresión.

iii) Categoría III

25. La fuente afirma además que la detención del Sr. Abdullayev viola su derecho a las garantías procesales y, por lo tanto, es arbitraria con arreglo a la categoría III.

26. En primer lugar, la fuente reitera que se incumplió el artículo 9, párrafo 2, del Pacto, así como el artículo 19 de la Constitución de Turquía y el artículo 67 de la Constitución de Azerbaiyán, que contienen obligaciones similares. Al Sr. Abdullayev no se le presentó una orden judicial y no se le permitió acceder al sumario por medio de sus representantes

legales; además, la única justificación de su arresto fue una notificación roja que había sido anulada en noviembre de 2014. En Turquía no se inició ningún procedimiento administrativo de extradición.

27. En segundo lugar, la fuente se remite al artículo 9, párrafo 3, del Pacto y recuerda que, como ha subrayado el Comité de Derechos Humanos, toda persona arrestada debe comparecer ante un juez o jueza en un plazo de 48 horas, salvo que concurran circunstancias excepcionales¹. Esta disposición se refleja tanto en la Constitución de Turquía como en el Código de Procedimiento Penal de Azerbaiyán. Además, el artículo 9, párrafo 4, del Pacto establece el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal. La fuente señala que el Sr. Abdullayev no compareció ante ningún tribunal antes de ser entregado extrajudicialmente a Azerbaiyán y que no fue llevado ante un tribunal sino cinco días después de ser arrestado.

28. En tercer lugar, la fuente se remite al artículo 9, párrafo 3, del Pacto y recuerda que, como ha explicado el Comité de Derechos Humanos, la reclusión previa al juicio debe basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito². Análogamente, el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal de Azerbaiyán dispone que, para imponer la prisión preventiva a un acusado, deben existir “motivos suficientes” para sospechar que el acusado, por ejemplo, huirá, obstruirá la investigación o cometerá otros delitos. La fuente sostiene que el Gobierno de Azerbaiyán no aportó ninguna prueba que justificara la detención preventiva del Sr. Abdullayev, y el tribunal no realizó una determinación individualizada de que dicha medida resultara razonable y necesaria.

29. Además, la fuente afirma que se negó al Sr. Abdullayev la presunción de inocencia consagrada en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que, normalmente, los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos³. A pesar de ello, el Sr. Abdullayev tuvo que asistir a su juicio desde una jaula con barrotes de metal, lo cual es un quebrantamiento directo de la presunción de inocencia.

30. La fuente también afirma que el Sr. Abdullayev no tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial, en contra de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. El enjuiciamiento de civiles por tribunales militares puede conculcar en la práctica el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial y, como ha señalado el Comité de Derechos Humanos, debe ser excepcional, es decir, limitarse a los casos en que el Estado parte pueda demostrar que el recurso a dichos tribunales es necesario y está justificado por motivos objetivos y serios, y que, por la categoría específica de los individuos y las infracciones de que se trata, los tribunales civiles no están en condiciones de llevar adelante esos procesos⁴. La fuente señala que el Grupo de Trabajo ha recordado, en el mismo sentido, que los tribunales militares nunca deberían juzgar a civiles, aun cuando sean acusados junto con personal militar. El Sr. Abdullayev, que es civil, fue juzgado por el Tribunal Militar de Bakú. El Gobierno de Azerbaiyán ha tratado de justificarlo aduciendo el artículo 68, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal, que prevé el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares cuando un delito cometido por personal militar implique también a un civil. Sin embargo, Azerbaiyán no ha demostrado que el enjuiciamiento del Sr. Abdullayev por un tribunal militar fuera necesario y estuviera justificado por motivos objetivos y serios, ni que los tribunales civiles no estuvieran en condiciones de llevar adelante el proceso. La fuente sostiene que el Gobierno no ha justificado suficientemente que los guardias de fronteras no pudieran ser juzgados ante un tribunal civil o que no se pudieran desvincular las causas.

¹ Observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 33.

² *Ibid.*, párr. 38.

³ Observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 30.

⁴ *Ibid.*, párr. 22.

31. La fuente destaca también que Turquía y luego Azerbaiyán negaron al Sr. Abdullayev el acceso a la asistencia letrada, lo cual es contrario al artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto. Recuerda que la Constitución de Azerbaiyán también protege el derecho a la asistencia letrada. Además, el Código de Procedimiento Penal de Azerbaiyán establece que el Gobierno “no podrá sugerir que la persona sospechosa o acusada sea representada por un defensor o defensora específico” (art. 92.14), y que solo se nombrará a un defensor o defensora de oficio “si la situación económica de la persona detenida no le permite contratar a un abogado o abogada por su cuenta” (art. 153.2.7). Al Sr. Abdullayev no se le permitió ponerse en contacto con sus abogados ni elegir a uno en concreto, y se le nombró un defensor de oficio a pesar de que podía y quería nombrar a su propio abogado. Además, fue devuelto a Azerbaiyán sin haber tenido acceso a asistencia letrada. Al abogado extranjero del Sr. Abdullayev se le negó reiteradamente el acceso a su cliente mientras este estaba detenido en Bakú.

32. Por último, la fuente sostiene que en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) se subraya que no se debe denegar la comunicación con la familia y que se deben permitir las visitas y la correspondencia con el mundo exterior. El Sr. Abdullayev no ha podido ver, hablar por teléfono o mantener correspondencia con su familia desde su entrega extrajudicial. Su única interacción con su familia se ha limitado a breves momentos durante las audiencias judiciales o justo después. Aunque su familia intentó visitarlo en el centro de detención para festejar con él su cumpleaños en mayo de 2019, no se les permitió verlo.

iv) Categoría IV

33. Según la fuente, el arresto y la entrega extrajudicial del Sr. Abdullayev a Azerbaiyán por Turquía, a pesar de su condición de refugiado en Alemania, constituye una devolución contraria al derecho internacional y nacional, por lo que su detención actual es arbitraria con arreglo a la categoría IV.

34. La fuente señala que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en la que tanto Azerbaiyán como Turquía son Estados partes, dispone que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas (art. 33, párr. 1). Las orientaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indican que la determinación de asilo por un país debe ser respetada y reconocida por los demás países.

35. En el caso del Sr. Abdullayev, la fuente recuerda que Alemania le concedió asilo el 26 de noviembre de 2013. El Sr. Abdullayev comunicó este hecho a las autoridades turcas durante su arresto y detención en Turquía antes de ser entregado a los representantes azerbaiyanos. El Gobierno de Turquía estaba obligado, en virtud del Convenio Europeo de Extradición y de la normativa jurídica internacional, a asegurarse de que la solicitud de extradición de Azerbaiyán no obedeciera a motivaciones políticas. También estaba obligado a respetar la condición de refugiado del Sr. Abdullayev y a no devolverlo al país del que había solicitado refugio.

v) Categoría V

36. Por último, la fuente sostiene que la detención del Sr. Abdullayev es arbitraria porque constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de opinión política o de otra índole. En efecto, hay poderosas razones para suponer que una detención basada en el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales también constituye una discriminación por motivos de opinión política.

37. En opinión de la fuente, el Sr. Abdullayev es objeto de persecución a causa de sus críticas públicas al Gobierno de Azerbaiyán. Los cargos presentados contra el Sr. Abdullayev se derivan de una investigación de la empresa de su familia que el Ministerio de Hacienda inició el día después de que el Sr. Abdullayev publicara un vídeo en el que condenaba la violencia policial contra manifestantes de la oposición en Bakú. Por lo tanto, la fuente concluye que la detención del Sr. Abdullayev es arbitraria porque las

autoridades de Azerbaiyán la utilizan para poner fin a su activismo político contra el Presidente y su Gobierno.

Respuesta del Gobierno de Turquía

38. El 14 de noviembre de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno de Turquía en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió a Turquía que, a más tardar el 13 de enero de 2020, facilitara información detallada sobre las circunstancias del arresto y la detención del Sr. Abdullayev. El Grupo de Trabajo pidió además al Gobierno que aclarara las disposiciones legales que justificaban el arresto y la detención, así como la compatibilidad de estas medidas con las obligaciones de Turquía en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular con los tratados que había ratificado.

39. El 13 de enero de 2020, el Gobierno de Turquía solicitó una prórroga, que le fue concedida ampliando el plazo para responder hasta el 13 de febrero de 2020. El 12 de febrero de 2020, el Gobierno de Turquía presentó su respuesta, en la que sostiene que las autoridades turcas consideraron que el Sr. Abdullayev representaba una amenaza para el orden público y la seguridad porque INTERPOL había emitido una notificación roja en su contra por los delitos de evasión de impuestos y administración ilegal de empresas. Por lo tanto, se dictó una orden de expulsión en su contra de conformidad con el artículo 54 de la Ley núm. 6458. En consecuencia, la Dirección General de Gestión de las Migraciones solicitó a la Dirección General de Seguridad que autorizara el arresto a fin de iniciar el procedimiento de expulsión de conformidad con la Ley núm. 6458, teniendo también en cuenta los artículos 4 (sobre el principio de no devolución) y 55 (exención de una decisión de expulsión) de la Ley.

40. El Gobierno se remite a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que este ha dictaminado que, por regla general, los Estados están facultados para no aceptar a un extranjero, expulsar a un extranjero que haya entrado ilegalmente en el país o que intente permanecer ilegalmente en él, devolver a una persona que haya cometido un delito en el país en que se encuentre o devolver a un extranjero a otro país en el que haya cometido un delito. Además, el Protocolo núm. 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que Turquía ratificó el 2 de mayo de 2016, establece claramente que se puede expulsar a un extranjero antes de que este ejerza sus derechos (el derecho a exponer razones contra su expulsión, el derecho a que se revise su caso y el derecho a estar representado a esos efectos ante la autoridad competente) cuando dicha expulsión sea necesaria en interés del orden público o esté fundada en motivos de seguridad nacional.

41. Según el Gobierno, el Sr. Abdullayev fue arrestado en Estambul el 21 de abril de 2019 y la Dirección Provincial de Gestión de las Migraciones de Estambul hizo una evaluación de su caso sobre la base de la información reunida. Tomando en consideración las órdenes de restricción de su pasaporte activas por fraude y la notificación de INTERPOL en su contra por delitos de evasión de impuestos y administración ilegal de empresas, se tomó la decisión de expulsarlo de conformidad con el artículo 54.1.d de la Ley núm. 6458, que incluye claramente entre los motivos de expulsión la amenaza al orden público o a la seguridad.

42. El Sr. Abdullayev fue sometido a un reconocimiento médico después de su arresto, y se informó a su abogado a petición suya. Por lo tanto, el 22 de abril de 2019, el Sr. Abdullayev no fue extraditado a Azerbaiyán, sino expulsado de conformidad con la decisión de las autoridades turcas competentes, en virtud de la legislación pertinente y del derecho internacional. Como Estado soberano, Turquía tiene derecho a expulsar a las personas que considere una amenaza para la seguridad pública.

43. Así pues, el Gobierno de Turquía rechaza las alegaciones de detención arbitraria del Sr. Abdullayev.

Respuesta del Gobierno de Azerbaiyán

44. El 14 de noviembre de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno de Azerbaiyán con arreglo a su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió a Azerbaiyán que, a más tardar el 13 de enero

de 2020, facilitara información detallada sobre las circunstancias de la detención del Sr. Abdullayev. El Grupo de Trabajo también pidió al Gobierno que le facilitara información detallada sobre la situación actual del Sr. Abdullayev y que aclarara las disposiciones legales que justificaban su detención y la compatibilidad de esta con las obligaciones de Azerbaiyán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular con los tratados que había ratificado. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de Azerbaiyán a que garantizara la integridad física y mental del Sr. Abdullayev.

45. El 8 de enero de 2020, el Gobierno presentó su respuesta, en la que informaba al Grupo de Trabajo de que, el 7 de junio de 2013, el Ministerio de Hacienda había incoado una causa penal contra el Sr. Abdullayev con arreglo al artículo 213.2.2. del Código Penal (evasión de impuestos en gran escala), y que, el 25 de junio de 2013, el investigador había decidido imputar al Sr. Abdullayev con arreglo al artículo 213.2.2.

46. El Gobierno afirma que había numerosas pruebas de que el Sr. Abdullayev había infringido el Código Fiscal nacional y eludido el pago del equivalente a aproximadamente 1,8 millones de dólares de los Estados Unidos en impuestos. Posteriormente, el 25 de junio de 2013, el investigador emitió una orden de busca y captura del acusado, según lo dispuesto en los artículos 150.1 y 278 del Código de Procedimiento Penal. El Tribunal Distrital de Yasamal, a petición de la Fiscalía General, y dado que el Sr. Abdullayev había sido imputado por un delito punible con la privación de libertad durante más de dos años, optó por dos meses de prisión preventiva como medida restrictiva.

47. El 2 de julio de 2013, el investigador emitió otro escrito de acusación del Sr. Abdullayev con arreglo a los artículos 192.2.2 y 213.2.2 del Código Penal, dado que la empresa controlada por el Sr. Abdullayev había presentado declaraciones fiscales distorsionadas y operaba sin permiso, acumulando así una cantidad considerable de beneficios.

48. El 22 de noviembre de 2013 se suspendió el proceso penal, dado que se desconocía el paradero del Sr. Abdullayev. El 12 de diciembre de 2013, el asesor letrado del Sr. Abdullayev pidió que se retiraran los cargos presentados contra su cliente, dado que el Sr. Abdullayev había pagado todos sus impuestos. El 16 de diciembre de 2013, la solicitud fue rechazada por carecer de fundamento.

49. El 11 de abril de 2014 se envió a las autoridades alemanas una solicitud de extradición, que fue rechazada el 8 de mayo de 2015. El 6 de mayo de 2014 se reabrió la causa. El 7 de mayo de 2014, el tribunal aprobó la petición del Fiscal General de arrestar al Sr. Abdullayev, teniendo en cuenta que se había fugado de las autoridades.

50. El 31 de mayo de 2016 se incoó una nueva causa penal contra el Sr. Abdullayev, debido a la aparición de nuevos hechos relacionados con la acusación de evasión de impuestos. El 27 de septiembre de 2016 se vincularon las dos causas penales. El 11 de octubre de 2016, el tribunal optó por imponer al Sr. Abdullayev 1 mes y 14 días de detención como medida restrictiva, de conformidad con los artículos 154 a 158 y 452 del Código de Procedimiento Penal.

51. El 14 de febrero de 2018 se incoó una nueva causa penal contra el Sr. Abdullayev en virtud de los artículos 178.3.2 y 320.1 del Código Penal, dado que la empresa que dirigía había falsificado documentos oficiales para apropiarse de una gran cantidad de bienes de otra persona.

52. El 7 de marzo de 2018, sobre la base de la información recibida por las autoridades acerca de los frecuentes viajes del Sr. Abdullayev a Turquía, se envió una solicitud de extradición a ese país. Si bien no se recibió respuesta a dicha solicitud, el Sr. Abdullayev fue expulsado de Turquía a Azerbaiyán y entregado a la policía del aeropuerto el 22 de abril de 2018.

53. El 23 de abril de 2018, el Sr. Abdullayev fue entregado a las autoridades encargadas de la investigación y en la misma fecha fue informado, en presencia de sus dos abogados, de los delitos que le imputaba el investigador del Ministerio de Hacienda con arreglo a los artículos 192.2.2 y 213.2.2 del Código Penal. El Sr. Abdullayev fue detenido de conformidad con la decisión del Tribunal Distrital de Yasamal de 11 de octubre de 2016, que le impuso 1 mes y 14 días de prisión preventiva como medida restrictiva.

54. El 25 de abril de 2018, el Departamento Principal de Lucha contra la Delincuencia Organizada del Ministerio del Interior imputó al Sr. Abdullayev por los delitos contemplados en los artículos 178.3.1, 182.3.1, 192.2.2, 192.2.3, 213.2.1, 213.2.2, 308.2 y 318.2 del Código Penal. Esos cargos le fueron anunciados el mismo día. El Gobierno señaló que el Tribunal Distrital de Nasimi había prorrogado la prisión preventiva del Sr. Abdullayev el 31 de mayo de 2018, el 6 de septiembre de 2018 y el 12 de febrero de 2019.

55. Según el material reunido mediante la investigación, entre las actividades delictivas del Sr. Abdullayev figuraban las de construcción sin licencia, evasión de impuestos, extorsión mediante el uso de amenazas y organización del cruce ilegal de la frontera por un familiar mediante el soborno de funcionarios de fronteras.

56. El 4 de marzo de 2019 concluyó la fase de investigación de los hechos mencionados, y el 19 de marzo de 2019 se remitió la causa al Tribunal Militar de Bakú. El 1 de octubre de 2019, el Tribunal Militar de Bakú declaró al Sr. Abdullayev culpable de los delitos de blanqueo de dinero o bienes obtenidos por medio de un delito, influencia ilegal en la toma de decisiones de un funcionario y falsificación de documentos oficiales con la ayuda de cómplices, y lo condenó a seis años de prisión. El Sr. Abdullayev recurrió la sentencia ante el Tribunal de Apelación de Bakú, que aún no se ha pronunciado al respecto. El Sr. Abdullayev se encuentra actualmente en el centro de detención núm. 1 de Bakú.

57. El Gobierno observa que, como se desprende de los hechos descritos y como demuestra claramente el expediente sumarial, había pruebas suficientes para imputar al Sr. Abdullayev. La investigación permitió reunir pruebas suficientes e irrefutables de su culpabilidad por los delitos de evasión de impuestos, actividades mercantiles ilegales y cruce ilegal de fronteras, entre otros.

58. Además, en lo que respecta a la prescripción de los delitos, el cargo de evasión de impuestos se presentó en algún momento entre 2009 y 2013. De conformidad con el artículo 75 del Código Penal, el plazo de prescripción de ese delito es de siete años.

59. Con arreglo al artículo 75.3 del Código Penal, el plazo de prescripción se interrumpe si el acusado se fuga. Por consiguiente, el plazo de prescripción se detuvo el 25 de junio de 2013, cuando un investigador del Ministerio de Hacienda dictó una orden de busca y captura del acusado. Además, en este caso los delitos no podían prescribir porque se consideraba que los hechos delictivos no habían terminado.

60. El Gobierno se opone además a las alegaciones de la fuente según las cuales el Sr. Abdullayev fue llevado ante el Tribunal Distrital de Nasimi el 25 de abril de 2018, más de 48 horas después de su arresto. Observa que en la documentación del caso no hay información sobre la comparecencia del Sr. Abdullayev ante el tribunal en esa fecha. Hubo varias resoluciones judiciales que ordenaban el arresto del Sr. Abdullayev; la última de ellas se dictó el 11 de octubre de 2016. El Sr. Abdullayev era buscado desde junio de 2013 y no fue devuelto a Azerbaiyán hasta el 22 de abril de 2018; se le informó de los delitos que se le imputaban los días 23 y 25 de abril de 2018 en presencia de sus dos abogados. Por lo tanto, no fue necesario llevarlo ante un tribunal para arrestarlo. El Sr. Abdullayev no ha apelado la decisión del 11 de octubre de 2016 y ni él ni sus abogados se quejaron de que no fuera llevado ante un tribunal en las 48 horas siguientes a su arresto.

61. El Gobierno observa que se han garantizado al Sr. Abdullayev unas condiciones materiales adecuadas y el derecho a hacer llamadas y recibir correspondencia. El Sr. Abdullayev ha recibido varios envíos y se ha entrevistado con sus abogados en condiciones de confidencialidad. El 21 de noviembre de 2019 se reunió con representantes de la embajada de Alemania.

62. De conformidad con el artículo 26 de la Ley de la Abogacía, la prestación de asistencia jurídica por abogados extranjeros en Azerbaiyán se limita a la prestación de asesoramiento sobre la aplicación de las leyes del Estado de nacimiento del abogado o abogada extranjero o del derecho internacional.

63. El Gobierno reitera que los dos abogados del Sr. Abdullayev estuvieron presentes desde el día en que fue entregado a las autoridades encargadas de la investigación (23 de

abril de 2018), lo cual incluye el momento en que se le informó de los cargos que se le imputaban.

64. De conformidad con el artículo 68.2 del Código de Procedimiento Penal, los tribunales militares conocerán de las causas relativas a delitos cometidos por el personal militar y, si el delito se comete con la participación de una persona que no es militar, la causa contra esa persona también será vista por el tribunal militar. Es lo que ocurrió en el caso del Sr. Abdullayev y de los cuatro miembros de las fuerzas armadas que organizaron conjuntamente el cruce ilegal de la frontera por su familiar. Los tribunales militares funcionan como tribunales de primera instancia, no tienen funciones extraordinarias y están integrados únicamente por jueces civiles. El artículo 127 de la Constitución garantiza la independencia de los jueces y juezas, y la Ley de los Tribunales y la Judicatura prohíbe el establecimiento de tribunales extraordinarios. El Sr. Abdullayev y sus abogados nunca se opusieron a que su causa fuera vista por el Tribunal Militar de Bakú.

65. Por último, en relación con la afirmación de la fuente según la cual la detención del Sr. Abdullayev se debe al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y no existe ningún vínculo jurídico entre el Sr. Abdullayev y la empresa, el Gobierno señala que el expediente sumarial contiene numerosas pruebas irrefutables de las actividades delictivas del Sr. Abdullayev y que es lamentable que la fuente intente politizar el caso.

Observaciones adicionales de la fuente

66. Las respuestas de ambos Gobiernos se enviaron a la fuente para que formulara observaciones. La fuente respondió señalando que las respuestas de los Gobiernos no refutaban, en muchos casos, las pruebas evidentes de violaciones del derecho internacional.

67. Según la fuente, aunque el Gobierno de Turquía admite los principales hechos expuestos en la comunicación, su respuesta contiene tergiversaciones que socavan su credibilidad, como cuando afirma que el Sr. Abdullayev fue “expulsado”, que se habían emitido órdenes de restricción de su pasaporte y que existía una notificación de INTERPOL en su contra. La fuente insiste en que la entrega del Sr. Abdullayev de Turquía a Azerbaiyán infringió el derecho internacional, europeo y turco.

68. En relación con la respuesta del Gobierno de Azerbaiyán, la fuente sostiene que, a pesar de las afirmaciones del Gobierno en sentido contrario, el arresto y la detención hasta este día del Sr. Abdullayev son arbitrarios y contrarios al derecho internacional. La fuente insiste en que el Sr. Abdullayev está detenido y fue enjuiciado a causa de sus críticas al Gobierno de Azerbaiyán. Además, fue arrestado en Turquía sin orden judicial y trasladado por la fuerza e ilegalmente a Azerbaiyán en lo que constituyó una entrega extrajudicial. También se le han denegado numerosas garantías procesales, como su derecho a acceder a la asistencia letrada y a su familia, la posibilidad de pedir la libertad bajo fianza, la presunción de inocencia y la comparecencia sin demora ante un juez o jueza.

69. La fuente señala que el Gobierno no niega que el Sr. Abdullayev fue condenado por motivos políticos en mayo de 2007 después de que criticara al Presidente durante una sesión parlamentaria, ni menciona que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en marzo de 2019 que la condena de 2007 había violado el derecho del Sr. Abdullayev a un juicio con las debidas garantías⁵.

70. El Gobierno tampoco niega que, en junio de 2013, el Sr. Abdullayev publicó en Internet un vídeo en el que se podía ver a agentes de policía de Bakú dispersando a manifestantes y en el que el propio Sr. Abdullayev llamaba a la población a manifestarse contra el Gobierno de Azerbaiyán, y que al día siguiente el Ministerio de Hacienda inició una investigación penal por evasión de impuestos contra la empresa Araz Inc. Asimismo, el Gobierno no niega en su respuesta que el Sr. Abdullayev fue arrestado en Turquía sin una orden judicial, que no se le informó del motivo de su arresto cuando se produjo este, ni que la decisión del tribunal de Azerbaiyán del 11 de octubre de 2016 no puede autorizar ni justificar el arresto del Sr. Abdullayev en Turquía.

⁵ *Abdullayev v. Azerbaijan*, demanda núm. 6005/08, sentencia de 7 de marzo de 2019, párr. 66.

71. Además, según la fuente, la respuesta del Gobierno no niega varias de las violaciones de las garantías procesales descritas, como el hecho de que el Sr. Abdullayev fue trasladado por la fuerza de Turquía a Azerbaiyán sin haber comparecido ante un tribunal para que examinara su extradición o expulsión, que fue entregado a Azerbaiyán a pesar de haber obtenido asilo en Alemania debido a la persecución que podía sufrir en Azerbaiyán, o que al menos dos representantes del Ministerio del Interior de Azerbaiyán acompañaron al Sr. Abdullayev en el avión de línea que lo trasladó a Bakú. El Gobierno tampoco ha señalado o aducido que, cuando fue trasladado por la fuerza, el Sr. Abdullayev tuviera un pasaporte azerbaiyano o un visado azerbaiyano que le habría permitido viajar legalmente a Azerbaiyán.

72. Por último, la fuente afirma que la respuesta del Gobierno contiene tergiversaciones que socavan su credibilidad, como cuando indica que el Sr. Abdullayev poseía y controlaba Araz Inc. y Araz Construction, que no pagaba impuestos y que se han respetado sus derechos durante su detención.

Deliberaciones

73. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y a los Gobiernos de Azerbaiyán y Turquía por sus respuestas y aprecia la cooperación de las partes en este asunto.

74. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Abdullayev es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en los dos Gobiernos en caso de que deseen refutar las alegaciones. La mera afirmación por los dos Gobiernos de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

75. Observando que se han formulado alegaciones contra ambos Gobiernos, el Grupo de Trabajo procederá a examinarlas por separado.

Alegaciones relativas a Turquía

76. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo observa que la situación del Sr. Abdullayev está comprendida en el ámbito de las suspensiones que Turquía ha decretado en virtud del Pacto. Mediante una comunicación de fecha 21 de julio de 2016, el Gobierno de Turquía informó al Secretario General de que había declarado el estado de excepción, con una duración de tres meses, ante la existencia de una grave amenaza a la seguridad y el orden públicos que constituía un peligro para la vida de la nación en el sentido del artículo 4 del Pacto⁶.

77. El Grupo de Trabajo, al tiempo que constata la notificación de esas suspensiones, hace hincapié en que, en el cumplimiento de su misión, también está facultado, en virtud del párrafo 7 de sus métodos de trabajo, para remitirse a las normas internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando corresponda, a otras normas internacionales. Además, en el presente caso, los artículos 9 y 14 del Pacto son los más pertinentes para la presunta detención del Sr. Abdullayev. Como ha declarado el Comité de Derechos Humanos, los Estados partes que suspendan la aplicación de disposiciones del Pacto deben asegurarse de que esas suspensiones se adopten en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación⁷. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción el levantamiento del estado de excepción en Turquía en julio de 2018 y la revocación de las suspensiones decretadas en virtud del Pacto.

78. El Grupo de Trabajo observa que no se discute que el Sr. Abdullayev fue arrestado en Estambul el 21 de abril de 2018 por las autoridades turcas y expulsado a Azerbaiyán al

⁶ Véase <https://treaties.un.org/doc/publication/cn/2016/cn.580.2016-eng.pdf>.

⁷ Observación general núm. 29 (2001), relativa a la suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, párr. 4; y núm. 35, párrs. 65 y 66. Véase también Comité de Derechos Humanos, observaciones generales núm. 32, párr. 6; y núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, párr. 5.

día siguiente. Según la fuente, con esa actuación se vulneraron los derechos del Sr. Abdullayev reconocidos en el artículo 9 del Pacto, ya que no se le presentó una orden judicial ni se le dio la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención.

79. El Gobierno de Turquía ha sostenido que el Sr. Abdullayev fue arrestado porque se consideró que representaba una amenaza para la seguridad nacional. Esa conclusión se basó en una notificación de INTERPOL contra el Sr. Abdullayev por los delitos de evasión de impuestos y administración ilegal de empresas. Por lo tanto, el Gobierno sostiene que la decisión de arrestar y expulsar al Sr. Abdullayev fue debidamente adoptada por las autoridades turcas correspondientes.

80. Aunque el Grupo de Trabajo no discute el derecho de cada Estado a expulsar a los extranjeros que representen una amenaza para su seguridad nacional⁸, ello no significa que esos extranjeros puedan ser sustraídos del amparo de la ley⁹. En particular, el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal, previsto en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto, asiste a todas las personas, sin excepción. El Grupo de Trabajo desea recordar que el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo que es esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática (A/HRC/30/37, párrs. 2 y 3). Este derecho, que es en realidad una norma imperativa de derecho internacional, se aplica a todas las formas (*ibid.*, párr. 11) y a todas las situaciones de privación de libertad, incluida no solo la detención a efectos de un proceso penal, sino también las situaciones de detención bajo el orden jurisdiccional administrativo y de otro tipo, como la detención militar, la detención de seguridad y la detención en virtud de medidas de lucha contra el terrorismo¹⁰. Además, también se aplica independientemente del lugar de detención o la terminología jurídica utilizada en la legislación. Toda forma de privación de libertad por cualquier motivo debe estar sujeta a la supervisión y el control efectivos del poder judicial¹¹. Por lo tanto, el derecho a impugnar la legalidad de su detención también asistía al Sr. Abdullayev cuando fue arrestado el 21 de abril de 2018. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha dado ninguna explicación sobre las razones por las que no se le concedió ese derecho y, por ende, considera que se infringió el artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

81. El Grupo de Trabajo recuerda además que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a impugnar la legalidad de la detención, las personas detenidas deben tener acceso, desde el momento del arresto, a la asistencia jurídica de un abogado o abogada de su elección, como se dispone en el principio 9 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal. Ese acceso también fue negado al Sr. Abdullayev, lo que repercutió negativamente en su capacidad para ejercer efectivamente su derecho a impugnar la legalidad de su detención, con lo que se le negaron además los derechos que le reconoce el artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

82. Además, el Gobierno no ha respondido a las alegaciones de la fuente según las cuales al Sr. Abdullayev nunca se le presentó una orden judicial ni ningún otro documento que explicara el fundamento jurídico de su detención. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha infringido el artículo 9, párrafo 1, del Pacto.

83. El Gobierno debería haber tomado en consideración el peligro real de detención arbitraria que correría el Sr. Abdullayev en caso de trasladarlo a Azerbaiyán. En cambio, procedió a expulsarlo por la fuerza a ese país, de donde había huido, sin tener en cuenta los peligros que podría correr ni haber evaluado los cargos y las pruebas presentados en su contra. El Grupo de Trabajo considera que esa actuación del Gobierno representa un quebrantamiento del principio de no devolución.

⁸ Véase Comité de Derechos Humanos, *V. M. R. B. c. el Canadá*, comunicación núm. 236/1987, y *J. R. C. c. Costa Rica*, comunicación núm. 296/1988.

⁹ Véase Comité de Derechos Humanos, *Alzery c. Suecia* (CCPR/C/88/D/1416/2005).

¹⁰ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, párr. 47 a).

¹¹ *Ibid.*, párr. 47 b).

84. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Grupo de Trabajo dictamina que la detención del Sr. Abdullayev en Turquía el 21 de abril de 2018 fue arbitraria con arreglo a la categoría I.

85. El Grupo de Trabajo observa que, al aducir que el Sr. Abdullayev no fue extraditado, sino expulsado por tratarse de un extranjero que representaba una amenaza para la seguridad nacional, el Gobierno no ha explicado qué amenaza representaba para su seguridad nacional ni de qué manera representaba dicha amenaza. El Gobierno tampoco ha explicado por qué no se llevó a cabo una evaluación cuando el Sr. Abdullayev solicitó un visado de turista antes de llegar a Turquía, especialmente si se tiene en cuenta que Azerbaiyán había presentado anteriormente solicitudes de extradición, incluida una en marzo de 2018, lo cual debería haber alertado a las autoridades turcas.

86. El Gobierno no ha respondido a las alegaciones de la fuente según las cuales la notificación de INTERPOL contra el Sr. Abdullayev había sido anulada antes de su arresto. Además, si efectivamente fue expulsado de Turquía, el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Abdullayev no fue devuelto a su país de residencia (Alemania), que le había concedido el estatuto de refugiado. Por último, el Grupo de Trabajo considera inverosímil que los agentes de Azerbaiyán se encontraran simplemente por casualidad en Turquía y se ofrecieran a acompañar al Sr. Abdullayev en el avión que lo trasladó a Azerbaiyán. Más bien, parece que las autoridades turcas y azerbaiyanas coordinaron la expulsión del Sr. Abdullayev para evitar los procedimientos legales de extradición.

87. En vista de ello, el Grupo de Trabajo está convencido de que el Sr. Abdullayev no fue simplemente expulsado de Turquía, sino que su expulsión fue de hecho una extradición fundada en el proceso que se había abierto en su contra en Azerbaiyán. Las autoridades turcas simplemente arrestaron al Sr. Abdullayev y lo llevaron al aeropuerto para entregarlo a las autoridades de Azerbaiyán, que lo trasladarían a su país. El Grupo de Trabajo no puede aceptar que esa forma de actuar constituya un procedimiento de extradición debidamente constituido. Así pues, el Gobierno de Turquía también ha incumplido la obligación que le impone el artículo 13 del Pacto de garantizar que los extranjeros que se hallen legalmente en su territorio solo sean expulsados en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley y de permitirles exponer las razones que los asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente y hacerse representar ante ella. Además, dado que la detención y la extradición del Sr. Abdullayev se practicaron haciendo caso omiso de los procedimientos de extradición establecidos, con lo que se le negó el derecho a un juicio con las debidas garantías, consagrado en el artículo 14 del Pacto, el Grupo de Trabajo también considera que su detención es arbitraria con arreglo a la categoría III.

88. Puesto que la detención del Sr. Abdullayev se efectuó con el fin de trasladarlo a Azerbaiyán, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno de Turquía es responsable de sus propios actos con respecto al arresto, la detención y la expulsión del Sr. Abdullayev, así como de las posteriores violaciones de sus derechos en Azerbaiyán.

89. El Grupo de Trabajo agradecería tener la oportunidad de realizar una visita a Turquía. Habida cuenta de que ha transcurrido un período considerable desde su última visita a ese país, que se remonta a octubre de 2006, y tomando nota de la invitación permanente cursada por el Estado a todos los procedimientos especiales, el Grupo de Trabajo considera que es el momento adecuado para realizar otra visita de conformidad con sus métodos de trabajo.

Alegaciones relativas a Azerbaiyán

90. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo desea aclarar que las normas de procedimiento que rigen su examen de las comunicaciones sobre presuntos casos de detención arbitraria figuran en sus métodos de trabajo. Estos no incluyen ninguna disposición que impida al Grupo de Trabajo examinar las comunicaciones debido a que no se hayan agotado los recursos internos en el país de que se trate. El Grupo de Trabajo

también ha confirmado en su jurisprudencia que los autores o autoras no están obligados a agotar los recursos internos para que la comunicación se considere admisible¹².

91. En cuanto a las alegaciones formuladas específicamente contra el Gobierno de Azerbaiyán, el Grupo de Trabajo observa que la fuente ha afirmado que la detención del Sr. Abdullayev se inscribe en las categorías I, II, III, IV y V del Grupo de Trabajo. El Gobierno niega estas alegaciones. El Grupo de Trabajo examinará las alegaciones una por una.

i) Categoría I

92. El Grupo de Trabajo recuerda que considera que una detención es arbitraria con arreglo a la categoría I si carece de fundamento jurídico. En el presente caso, el Grupo de Trabajo observa una vez más que no se discute que el Sr. Abdullayev fue arrestado en Estambul el 21 de abril de 2018 por las autoridades turcas y expulsado a Azerbaiyán al día siguiente. El Grupo de Trabajo es consciente de que el Gobierno ha explicado las investigaciones en curso sobre los negocios del Sr. Abdullayev, los diversos cargos que se han presentado y las órdenes de busca y captura dictadas en su contra desde 2013. El Gobierno también ha explicado que se presentaron dos solicitudes de extradición con respecto al Sr. Abdullayev: una en 2014, dirigida a Alemania, que fue denegada; y otra en marzo de 2018, dirigida a Turquía, a la que, según la información presentada por el Gobierno, no se respondió. Según el Gobierno de Azerbaiyán, el Sr. Abdullayev fue simplemente expulsado de Turquía el 22 de abril de 2018.

93. No obstante, el Grupo de Trabajo es consciente de que el Gobierno ha optado por no responder a las alegaciones de la fuente según las cuales la expulsión del Sr. Abdullayev a Azerbaiyán fue en realidad una extradición. El Gobierno tampoco ha explicado por qué debía extraditarse a Azerbaiyán al Sr. Abdullayev, que había recibido asilo en Alemania y no estaba en posesión de un pasaporte azerbaiyano. Además, el Gobierno de Azerbaiyán no ha respondido a las alegaciones según las cuales, una vez arrestado en Turquía, el Sr. Abdullayev fue entregado en el aeropuerto de Estambul a representantes de Azerbaiyán que lo acompañaron en el vuelo que lo condujo a su país. Si efectivamente se trataba de la expulsión de un extranjero de Turquía, la presencia de funcionarios de Azerbaiyán en el aeropuerto a la misma hora exacta estaba totalmente fuera de lugar.

94. El Grupo de Trabajo ya ha señalado que está convencido de que el Sr. Abdullayev no fue simplemente expulsado de Turquía. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha reconocido el arresto y el traslado forzoso del Sr. Abdullayev. El Gobierno de Azerbaiyán tuvo la oportunidad de respetar las debidas garantías procesales del Sr. Abdullayev iniciando, conforme a derecho, un proceso para extraditarlo desde Turquía, pero decidió no hacerlo, por lo que es responsable de su detención arbitraria en Turquía.

95. Además, el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Abdullayev fue arrestado por las autoridades de Azerbaiyán a su llegada y no fue llevado ante una autoridad judicial. El Gobierno ha aducido que esto último era innecesario, ya que desde 2016 existía una orden judicial válida. El Grupo de Trabajo no puede aceptar que esa manera de actuar sea compatible con las salvaguardias previstas en el artículo 9 del Pacto. En particular, como ha sostenido sistemáticamente el Grupo de Trabajo¹³, para establecer que una detención es efectivamente legal, toda persona detenida tiene derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal, como se prevé en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto. El Grupo de Trabajo desea recordar que el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo que es esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática (A/HRC/30/37, párrs. 2 y 3). Este derecho, que es en realidad una norma imperativa de derecho internacional, se aplica a todas las formas (*ibid.*, párr. 11) y a todas las situaciones de privación de libertad, incluida no solo la detención a efectos de un proceso penal, sino también las situaciones de detención bajo el orden jurisdiccional

¹² Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 19/2013 y núm. 11/2000. Véanse también las opiniones núm. 41/2017, párr. 73; núm. 38/2017, párr. 67; núm. 11/2018, párr. 66; núm. 20/2019, párr. 81; y núm. 53/2019, párr. 59.

¹³ Véanse las opiniones núm. 1/2017, núm. 6/2017, núm. 8/2017, núm. 30/2017, núm. 2/2018, núm. 4/2018, núm. 42/2018, núm. 43/2018, núm. 79/2018 y núm. 49/2019.

administrativo y de otro tipo, como la detención militar, la detención de seguridad y la detención en virtud de medidas de lucha contra el terrorismo¹⁴.

96. El Grupo de Trabajo considera además que la supervisión judicial de la detención es una salvaguardia fundamental de la libertad personal (A/HRC/30/37, párr. 3) y es esencial para garantizar que la detención tenga un fundamento jurídico. En el presente caso, el Sr. Abdullayev no fue presentado ante un juez o jueza y, para justificarlo, el Gobierno se ha limitado a señalar que se cumplió su legislación nacional y que el Sr. Abdullayev podría haber impugnado la orden judicial de 2016. El Grupo de Trabajo recuerda, una vez más, que no le corresponde evaluar el cumplimiento por las autoridades nacionales de las disposiciones del derecho interno, sino examinar el conjunto de las actuaciones del tribunal y la propia legislación para determinar si cumplen las normas internacionales¹⁵. En el presente caso, la norma internacional que establece el derecho a impugnar la legalidad de la detención fue claramente infringida, ya que este derecho solo puede ejercerse si la persona detenida es llevada rápidamente ante un juez o jueza. Por lo tanto, al no haberse presentado sin demora al Sr. Abdullayev ante una autoridad judicial para permitirle impugnar la legalidad de la detención, no puede decirse que su detención fuera legal, ya que infringió el artículo 9, párrafo 4, del Pacto. También vulneró el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, ya que el Sr. Abdullayev no fue llevado sin demora ante un juez o jueza.

97. Además, puesto que durante los primeros días de su detención el Sr. Abdullayev no pudo impugnar la continuación de la misma, también se violó su derecho a un recurso efectivo, contemplado en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

98. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Abdullayev fue arbitraria con arreglo a la categoría I.

ii) Categoría II

99. La fuente sostiene que el Sr. Abdullayev fue detenido a causa de su activismo político. Sin embargo, la información recibida no permite al Grupo de Trabajo hacer ninguna evaluación sobre las alegaciones relativas a la categoría II.

iii) Categoría III

100. La fuente sostiene que la detención del Sr. Abdullayev se inscribe también en la categoría III debido a las numerosas violaciones de su derecho a ser oído con las debidas garantías que se cometieron durante el juicio celebrado en Azerbaiyán tras su regreso forzoso a ese país. El Gobierno niega estas alegaciones.

101. Sin embargo, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno ha optado por no responder a las alegaciones muy concretas formuladas por la fuente, según las cuales durante el juicio se mantuvo al Sr. Abdullayev en una jaula de aproximadamente 90 cm x 90 cm, con barrotes de metal, y si sus abogados deseaban conversar con él, tenían que obtener permiso del juez para acercarse a la jaula, lo que limitó en gran medida esas comunicaciones y la capacidad del Sr. Abdullayev para participar en el juicio.

102. El Grupo de Trabajo recuerda que la presunción de inocencia es la piedra angular de los derechos a un juicio con las debidas garantías enunciados en el artículo 14 del Pacto. Es fundamental para la protección de los derechos humanos y asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. Así pues, la presunción de inocencia impone a todas las autoridades públicas el deber de abstenerse de prejuzgar el resultado de un juicio y, como ha señalado el Comité de Derechos Humanos, normalmente, los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados ante el tribunal de alguna

¹⁴ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, párr. 47 a).

¹⁵ Opinión núm. 33/2015, párr. 80. Véanse también las opiniones núm. 15/2017, núm. 49/2019, núm. 58/2019 y núm. 60/2019.

otra manera que dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos¹⁶. Este principio se quebrantó claramente en el caso del Sr. Abdullayev y, por ende, el Grupo de Trabajo considera que se infringió el artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

103. Además, el Grupo de Trabajo también constata los grandes obstáculos que afectaron a la capacidad de los abogados para conversar con su cliente durante el juicio, que no han sido refutados por el Gobierno. Asimismo, la fuente ha alegado que no se permitió al abogado extranjero del Sr. Abdullayev reunirse con él. Aunque el Gobierno ha señalado que los abogados extranjeros solo pueden tratar con sus clientes cuestiones de derecho internacional, no ha explicado por qué no se permitió en el caso del Sr. Abdullayev. Además, el Gobierno asignó un defensor al Sr. Abdullayev a pesar de que este había expresado su deseo de ser representado por un abogado de su elección. El Gobierno no ha explicado por qué no se permitió al Sr. Abdullayev ser representado por un abogado de su elección. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo considera que se ha infringido el artículo 14, párrafo 3 b) y d).

104. La fuente también ha afirmado que el hecho de que el Sr. Abdullayev fuera juzgado por un tribunal militar constituyó una vulneración de su derecho a ser oído con las debidas garantías. Aunque el Gobierno afirma en su respuesta que sus procedimientos son conformes a la legislación interna, el Grupo de Trabajo tiene derecho a evaluar el conjunto de las actuaciones del tribunal y la propia legislación para determinar si cumplen las normas internacionales¹⁷.

105. En relación con la competencia del tribunal militar, el Grupo de Trabajo ha sostenido sistemáticamente en su práctica que el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares es contrario al Pacto y al derecho internacional consuetudinario, y que, con arreglo al derecho internacional, los tribunales militares solo deben tener competencia para juzgar a personal militar por delitos de carácter militar (A/HRC/27/48, párrs. 67 a 70)¹⁸. Además, todas las causas incoadas contra el Sr. Abdullayev, incluidas las relativas a su presunta evasión de impuestos y a otros delitos financieros, parecen haber sido trasladadas a la jurisdicción del tribunal militar. El Gobierno ha tenido la oportunidad de explicar las razones, pero no lo ha hecho. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo concluye que se ha infringido el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

106. El Grupo de Trabajo observa además que el Gobierno no ha respondido a las alegaciones formuladas por la fuente sobre la denegación al Sr. Abdullayev del contacto con su familia. Así pues, el Grupo de Trabajo dictamina que se han incumplido los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y la regla 58 de las Reglas Nelson Mandela.

107. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Abdullayev es arbitraria con arreglo a la categoría III.

iv) Categoría IV

108. La fuente ha alegado que la detención del Sr. Abdullayev se inscribe también en la categoría IV, ya que su arresto y traslado a Azerbaiyán, a pesar de su condición de persona a la que se había concedido asilo político en Alemania, fue una devolución ilegal de Turquía, lo que hace que su posterior detención en Azerbaiyán sea *ultra vires*. El Gobierno niega estas alegaciones.

109. El Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con sus métodos de trabajo, una detención es arbitraria con arreglo a la categoría IV cuando solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial. En el presente caso, ni la fuente ni el Gobierno afirman que el Sr. Abdullayev haya sido objeto de detención administrativa. Por

¹⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32, párr. 30.

¹⁷ Opinión núm. 33/2015, párr. 80. Véanse también las opiniones núm. 15/2017, núm. 49/2019, núm. 58/2019 y núm. 60/2019.

¹⁸ Véanse también las opiniones núm. 44/2016, núm. 30/2017, núm. 28/2018, núm. 32/2018 y núm. 66/2019.

el contrario, tanto la fuente como el Gobierno sostienen que ha sido detenido en el contexto de la justicia penal. Por lo tanto, la categoría IV no es aplicable a las circunstancias del Sr. Abdullayev.

v) Categoría V

110. El Grupo de Trabajo ya ha expresado su opinión sobre el activismo político del Sr. Abdullayev y sobre los presuntos vínculos de ese activismo con el presente caso. Así pues, el Grupo de Trabajo no está en condiciones de hacer ninguna evaluación en relación con la categoría V.

111. El Grupo de Trabajo agradecería la oportunidad de realizar una visita de seguimiento a Azerbaiyán, teniendo en cuenta que han transcurrido más de cuatro años desde su visita de mayo de 2016. El Grupo de Trabajo considera que es el momento adecuado para realizar otra visita de conformidad con sus métodos de trabajo.

Decisión

112. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

En lo que respecta a Turquía:

La privación de libertad de Huseyn Abdullayev es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 3, 9, 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.

En lo que respecta a Azerbaiyán:

La privación de libertad de Huseyn Abdullayev es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 3, 9, 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.

113. El Grupo de Trabajo pide a los Gobiernos de Turquía y Azerbaiyán que adopten las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Abdullayev sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

114. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería: a) que el Gobierno de Azerbaiyán ponga inmediatamente en libertad al Sr. Abdullayev; y b) que el Gobierno de Turquía y el Gobierno de Azerbaiyán concedan al Sr. Abdullayev el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que supone en los lugares de detención, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de Azerbaiyán a que adopte medidas urgentes para garantizar la liberación inmediata del Sr. Abdullayev.

115. El Grupo de Trabajo insta a los dos Gobiernos a que lleven a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Abdullayev y adopten las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

116. El Grupo de Trabajo solicita a los dos Gobiernos que difundan la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

117. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y a los dos Gobiernos que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Abdullayev y, de ser así, en qué fecha;

- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Abdullayev;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Abdullayev y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Turquía y Azerbaiyán con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

118. Se invita a ambos Gobiernos a que informen al Grupo de Trabajo de las dificultades que puedan haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indiquen si necesitan asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

119. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y a los dos Gobiernos que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

120. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado¹⁹.

[Aprobada el 26 de agosto de 2020]

¹⁹ Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.